

RECURSO DE QUEJA**EXPEDIENTE:** RQ-PP-18/2021**ACTOR:** PARTIDO FUERZA POR MÉXICO**AUTORIDAD RESPONSABLE:**
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 17,
CON CABECERA EN CAJEME, SONORA**MAGISTRADO PONENTE:** LEOPOLDO
GONZÁLEZ ALLARD

Hermosillo, Sonora, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado con clave RQ-PP-18/2021, promovido por Rosario Carolina Lara Moreno, en su carácter de Presidenta del Comité Estatal del partido Fuerza por México en Sonora, mediante el cual impugna el Cómputo Distrital, la declaración de validez y la otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la fórmula postulada por la candidatura común "Juntos Haremos Historia por Sonora", integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para la Elección de Diputado Local por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, llevado a cabo en sesión de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno; los agravios expresados y todo lo demás que fue necesario ver; y,

RESULTANDOS:

PRIMERO. Antecedentes. De los hechos narrados en el medio de impugnación, así como de las constancias que obran en el expediente y de los hechos notorios para este Tribunal,¹ particularmente de información publicada en diversas páginas electrónicas de internet, se advierten los hechos relevantes que a continuación se describen:

¹ Los cuales se invocan en términos de lo previsto en el artículo 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y con apoyo en la jurisprudencia XX.2o. J/24 y en la tesis I.3o.C.35 K (10a.), de los rubros: **"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR"** (Registro digital: 168124. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Novena Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470) y **"PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL"** (Registro digital: 2004949. Instancia: Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito. Décima Época. Materias(s): Civil, Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373. Tipo: Aislada).

I. Inicio del Proceso Electoral. Como hecho notorio, se tiene que por Acuerdo CG31/2020², de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las y los Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora.






II. Elección. Con fecha seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de Gobernadora o Gobernador, integrantes del Congreso del Estado y Ayuntamientos, entre ellas, la respectiva a diputados por el principio de mayoría relativa del distrito electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora.

III. Cómputo Distrital. Mediante sesión especial que inició el día nueve de junio del presente año, y que culminó al día siguiente, se llevó a cabo por parte del Consejo Distrital 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, el cómputo de la elección de Diputados por el principio de mayoría de dicho distrito, y cuyos resultados se describen en el "ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA" de la forma siguiente:

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

PARTIDO, COALICIÓN O CANDIDATO/A	(CON LETRA)	(CON NÚMERO)
	DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS	2232
	SIETE MIL CUARENTA Y TRES	7043
	QUINIENTOS CATORCE	514
	VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISIETE	22127
	CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO	5641
	MIL TRECIENTOS OCHO	1308
	TRESCIENTOS	300
	MIL CIENTO SESENTA	1160



² Acuerdo CG31/2020, del Índice del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; disponible para consulta en el enlace <http://ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG31-2020.pdf>.

	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS	3423
	CIENTO OCHENTA Y CUATRO	184
	TREINTA Y UNO	31
	TRES	3
	OCHO	8
CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS	CUARENTA Y SEIS	46
VOTOS NULOS	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS	1166
TOTAL	CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	45186

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS/AS INDEPENDIENTES

PARTIDO, COALICIÓN O CANDIDATO/A	(Con letra)	(Con número)
	DOS MIL TRECIENTOS DOCE	2312
	SIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS	7123
	QUINIENTOS OCHENTA	580
	TRES MIL NOVENTA Y SIETE	3097
	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS	4426
	CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO	5641
	DIEZ MIL CUATROCIENTOS	10400
	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO	4204
	MIL TRESCIENTOS OCHO	1308
	TRESCIENTOS	300
	MIL CIENTO SESENTA	1160
	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS	3423
CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS	CUARENTA Y SEIS	46
VOTOS NULOS	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS	1166
TOTAL	CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	45186

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS

PARTIDO, COALICIÓN O CANDIDATO/A	(Con letra)	(Con número)
	DIEZ MIL QUINCE	10015
	VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISIETE	22127
	CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO	5641
	MIL TRESCIENTOS OCHO	1308
	TRESCIENTOS	300
	MIL CIENTO SESENTA	1160
	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS	3423
CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS	CUARENTA Y SÉIS	46
VOTOS NULOS	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS	1166
TOTAL	CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	45186

IV. Declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría. Por acuerdo CDE/07/2021, de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, declaró la validez de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa de dicho distrito, y expidió la Constancia de Mayoría y Validez a la fórmula ganadora postulada por el partido político Morena, integrada de la siguiente forma:

NOMBRE	CARGO
ERNESTINA CASTRO VALENZUELA	DIPUTADA PROPIETARIA
SILVIA MARINA OLIVIA TARIN	DIPUTADA

	SUPLENTE
--	----------

SEGUNDO. Interposición del medio de impugnación.

I. Presentación. A fin de controvertir el acto mencionado en la fracción III del apartado anterior, se presentó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el siguiente medio de impugnación:

No.	Medio de impugnación	Recurrente	Fecha de presentación
1)	Recurso de Queja	Partido Político Fuerza por México, por conducto de Rosario Carolina Lara Moreno, en su calidad de Presidenta del Comité Directivo Estatal	14-junio-2021

Procediendo la autoridad responsable a dar el trámite correspondiente de acuerdo a la ley.

II. Avisos de presentación y remisión. Mediante oficios de fechas quince y diecinueve de junio del año en curso, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dio aviso a este Tribunal, de la interposición del recurso, y remitió los originales del mismo, el informe circunstanciado y demás documentación correspondiente.

III. Recepción del medio de impugnación en el Tribunal Estatal Electoral. Por auto de fecha veinte de junio del año en curso, este Tribunal tuvo por recibido el recurso de queja y anexos, así como las diversas constancias generadas con motivo del trámite del medio de impugnación, por parte del Instituto Estatal Electoral, así como el escrito de tercero interesado suscrito por Darbé López Mendivil, Representante Propietario del partido político Morena; asimismo, se tuvo por remitido el informe circunstanciado por parte del Presidente del Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora; ordenándose el registro del asunto con la clave **RQ-PP-18/2021**.

También se tuvo a la parte recurrente y a la Presidenta del Instituto Estatal Electoral, señalando domicilios y medios para recibir notificaciones, así como

personas autorizadas para oír las y recibirlas en su nombre; y se ordenó al Secretario General de Acuerdos procediera a corroborar el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 327 y 358 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

IV. Requerimiento previo a la admisión. En auto dictado el veintidós de junio del año en curso, se ordenó requerir al Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, y al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, por la remisión de diversas documentales relacionadas con el recurso de queja planteado.

V. Se ordena publicitación del recurso por parte del Consejo Distrital Electoral. Mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dado que el medio de impugnación no fue presentado ante la autoridad responsable: Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, como lo prevé el numeral 327, primer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se ordenó remitir mediante oficio, copia certificada del medio de impugnación y anexos, al Consejo Distrital aludido, para que llevara a cabo el procedimiento de publicitación y trámite conforme a lo establecido en los artículos 334 y 335 de la ley en cita; y hecho lo anterior, remitieran las constancias de publicitación para los efectos conducentes.

VI. Cumplimiento a requerimientos. Por autos de fecha veintisiete y veintiocho de junio, y dos de julio todos del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias de la publicitación del recurso, así como diversas documentales requeridas, además, discos compactos que contienen copias certificadas de las listas nominales de diversas casillas impugnadas; ordenándose agregar a los autos para que obren como corresponda.

VII. Admisión del medio de impugnación. Por auto de fecha diez de julio de dos mil veintiuno, al estimar que el Recurso de Queja interpuesto por el partido político Fuerza por México, por conducto de su Presidenta del Comité Directivo Estatal, Rosario Carolina Lara Moreno, reunía los requisitos previstos en los artículos 327 y 358 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, este Tribunal **admitió** el mismo.

De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 331 del ordenamiento legal antes invocado, se llevó a cabo la admisión de diversos medios de prueba ofrecidos por el recurrente y terceros interesados; asimismo, se tuvo por rendido el informe circunstanciado correspondiente y, por último, se ordenó la publicación de los autos.

de mérito en los estrados de este Tribunal y de manera virtual en la página oficial *www.teesonora.org.mx*, en el apartado denominado “*estrados electrónicos*”, en virtud de lo estipulado en el Acuerdo General emitido por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en fecha dieciséis de abril de dos mil veinte.

VIII. Requerimiento posterior a la admisión. Mediante auto dictado el veintidós de junio del año en curso, se ordenó requerir al Consejo Distrital Electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, por conducto, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por la remisión del: “Acta de cómputo distrital de la elección para las diputaciones locales de mayoría relativa, correspondiente al distrito electoral 17, o Acta final de cómputo de la elección”.

IX. Cumplimiento al anterior requerimiento. Por auto de fecha catorce de julio del año en curso, se tuvo por recibida la documental descrita en el párrafo que antecede.

X. Terceros interesados. Dentro del medio de impugnación en estudio, se tuvo como terceros interesados al C. Darbé López Mendivil, con el carácter de Representante Propietario del partido político Morena, así como a la C. Ernestina Castro Valenzuela, por su propio derecho, en su carácter de diputada electa por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral número XVII, con cabecera en Ciudad Obregón, Sonora.


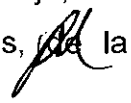
XI. Turno a ponencia. Mediante el mismo auto admisorio, en términos de lo previsto por el artículo 354, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se turnó el presente Recurso de Queja al Magistrado **LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD**, titular de la Primera Ponencia, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

XII. Substanciación. Substanciado que fue el medio de impugnación, y toda vez que no existe trámite alguno pendiente de realizar, y quedando el asunto en estado de dictar sentencia, da lugar a elaborar el proyecto de resolución, misma que se dicta hoy, y;



CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Estatal Electoral de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Queja, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 22, párrafo veintiséis, de la



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y en los diversos artículos 322, párrafo segundo, fracción III, 357 fracción III, 359 y 360, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

SEGUNDO. Finalidad del Recurso de Queja. La finalidad específica del Recurso de Queja está debidamente precisada en cuanto a sus alcances jurídicos, por el artículo 347 de la Ley en cita, que claramente establece que las resoluciones que recaigan al referido recurso tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto, acuerdo, omisión o resolución impugnados.

TERCERO. Consideraciones previas.

a) Precisión de la elección impugnada

Este Tribunal considera que resulta necesario aclarar en primer término, la elección que pretende impugnar el partido político actor, pues a pesar de que su escrito de demanda contiene algunos errores en su redacción, de una interpretación integral de la misma y de sus anexos, puede inferirse que impugna la elección de diputado local por el distrito electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora.

Lo anterior, debido a que, la demanda y anexos de un medio de impugnación, constituyen un todo y deben ser analizados de manera integral, a fin de determinar cuál es la elección que realmente impugna el recurrente.

En efecto, al llevar a cabo la labor de análisis íntegro de la demanda como de los documentos que la acompañan, se debe procurar armonizar los datos asentados en el documento en estudio, y sus anexos, para fijar un sentido que sea completo y congruente con todos sus elementos. Esto es, se debe buscar entender la voluntad del actor y, además, esto permite respetar con mayor amplitud el derecho fundamental de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con los principios de legalidad, seguridad jurídica e imparcialidad, por los que los impartidores de justicia electoral deben regirse.

Lo anterior encuentra sustento en la razón esencial contenida en las jurisprudencias 2a./J. 183/2005 y XVII.2o.C.T. J/6, con los rubros "**DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA**" y "**DEMANDA EN EL JUICIO**"

NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS”.

Atento a lo anterior, debe concluirse que, en el caso, de la demanda inicial y anexos, se advierte que el partido político actor señala con claridad que impugna *“los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de ella (sic) elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondiente a la elección de diputaciones locales”*.

Esto es, aun y cuando a lo largo del escrito de demanda también se encuentran referencias a impugnar *“el resultado y asignación de la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional”*; lo cierto es que, en aras de favorecer el acceso a la jurisdicción ante este Tribunal, dichos errores no deben considerarse suficientes para decretar la improcedencia del recurso de queja entablado por el instituto político actor.

Ello es así, ya que leído e interpretado de forma íntegra, sistemática y en su contexto el escrito en cuestión, provoca la convicción suficiente para que este Tribunal determine que lo realmente impugnado es el ***cómputo distrital, la declaración de validez y la expedición de la constancia de validez y mayoría de la elección de la diputación local por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Local 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, emitidos todos por el Consejo Distrital respectivo***, y se avoque a su estudio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 6/2002,³ de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que impone una obligación de interpretación favorable al acceso a la jurisdicción, del rubro ***“IMPUGNACIÓN DE MÁS DE UNA ELECCIÓN EN UN MISMO ESCRITO. NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA”***.

b) Precisión del recurso entablado

En segundo término, este Tribunal considera importante aclarar que, el partido político actor señala en su escrito inicial, que en contra de la elección y acto que señala como impugnados, interpone *juicio de inconformidad, con fundamento en los artículos 1, 3 párrafo 2, inciso b), 49, 50, párrafo 1, incisos b) o c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; sin embargo*, en

³ Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Jurisprudencia. Volumen 1, pp.383-384.

suplencia de queja, y atendiendo a la elección local combatida y la causa de pedir que se deduce de la totalidad de la demanda y de sus anexos, de conformidad con el artículo 345 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se debe concluir que el medio de impugnación entablado es el de Recurso de Queja, previsto y regulado por los artículos 322, párrafo segundo, fracción III, 357, 358, 359 y 360, de la ley estatal en cita.

CUARTO. Presupuestos de procedencia. El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 326, 327, 357 y 358, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que se promueve por quien se dice agraviado y violentado de manera directa por la determinación impugnada del Consejo Distrital responsable.

a). Oportunidad. El medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal de cuatro días, conforme lo previsto por el artículo 326 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues de las constancias sumariales se advierte que, el cómputo distrital se llevó a cabo el día nueve de junio de dos mil veintiuno, y que culminó al día siguiente; por tanto, si el Recurso de Queja fue presentado el día catorce del mismo mes y año, es evidente que se interpuso con la debida oportunidad dentro del plazo legal precisado, como se muestra en la siguiente tabla:

Acto impugnado	Plazo de 4 días para interponer el recurso	Fecha de presentación del recurso	Días inhábiles
Jueves diez de junio de dos mil veintiuno	Del viernes once al lunes catorce, del citado mes y año.	Lunes catorce de junio de dos mil veintiuno ⁴ .	No existen por encontrarnos en proceso electoral

b) Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito, en el que se hizo constar el nombre de quien promueve y designa domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, contiene la firma autógrafa del promovente, así como la identificación del acto impugnado, los hechos en que se basa la impugnación, los

⁴ Según sello de recibido visible a foja 5 del expediente.

agravios que en su concepto le genera el acto reclamado y los preceptos legales que se estima violados, lo referente a las pruebas y los puntos petitorios.

c) Legitimación, personería e interés jurídico. El actor está legitimado para promover el presente recurso, en términos de los artículos 329, fracción I, 330 y 357, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

Lo anterior por tratarse de un partido político que comparece a través de su Presidenta del Comité Directivo Estatal, personería acreditada y reconocida, según lo afirma el Consejero Presidente del Consejo Distrital respectivo, en el informe circunstanciado emitido.⁵

QUINTO. Terceros interesados. Este Tribunal advierte que los escritos de tercero interesado, presentados por Darbé López Mendivil, en su calidad de representante propietario del partido político Morena, y Ernestina Castro Valenzuela, por su propio derecho, en su carácter de diputada electa por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral número XVII, con cabecera en Ciudad Obregón, Sonora, reúnen los requisitos que exige para su admisión el artículo 334, párrafo cuarto, de la ley estatal de la materia, conforme a los razonamientos que se desarrollan a continuación:

I. Forma. Los escritos de tercero interesado se presentaron ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el que se hizo constar el nombre y firma de quienes comparecieron con tal carácter, así como la razón del interés jurídico en que funda su pretensión concreta.

No es óbice a lo anterior, que dichos escritos hayan sido presentados directamente ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y no ante el Consejo Distrital Responsable, pues en aras de privilegiar el acceso a la justicia pronta, expedita y completa, tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, se les tiene por debidamente presentados.

II. Oportunidad. Los escritos de tercero interesado se exhibieron oportunamente, pues se presentaron de forma anticipada al plazo de setenta y dos horas que indica el artículo 334, párrafo cuarto, en relación con la fracción II del párrafo primero del ordinal referido, de la Ley electoral local.

⁵ Fojas 68 a la 70.

III. Legitimación y personería. Tanto el Partido Morena como la C. Ernestina Castro Valenzuela, tienen legitimación para comparecer como terceros interesados, en términos de lo establecido en el artículo 329, fracción III, de la Ley electoral de esta entidad, toda vez que tiene un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

Asimismo, se estima que se tiene reconocida la personería de Darbé López Mendivil, con la calidad de Representante Propietario del instituto político Morena, según se desprende de la acreditación visible a foja 54 de autos, en donde se le identifica como representante de dicho instituto político.

SEXTO. Pretensión, agravios y precisión de la litis.

a) Pretensión. Una vez realizadas las precisiones anteriores, se tiene que la causa de pedir del recurrente es, en esencia, que este Tribunal lleve a cabo un recuento jurisdiccional parcial, nulifique el cómputo de diversas casillas, declare la nulidad de la elección de la diputación local por el principio de mayoría relativa, correspondiente al Distrito Electoral Local 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, y en consecuencia, se revoque la declaración de validez de la misma, así como de la constancia de mayoría y validez otorgada a favor de la fórmula postulada por la candidatura común "Juntos Haremos Historia por Sonora", integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora.

b) Síntesis de agravios. Resulta innecesario transcribir los motivos de inconformidad esgrimidos por el accionante, sin que por ello se trasgredan los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir en el dictado de las sentencias, ni se afecte a las partes contendientes, habida cuenta que éstos se encuentran satisfechos cuando el Tribunal precisa los planteamientos esbozados en la demanda, los estudia y da respuesta acorde; lo anterior, al tenor de la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. /J 58/2010, de rubro: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN"**.

Lo expuesto no es impedimento para hacer un resumen de los agravios, sin eludir el deber que tiene este órgano jurisdiccional de examinar e interpretar íntegramente la demanda, a fin de identificar los agravios hechos valer, con el objeto de llevar a cabo su análisis, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias 4/99 y 3/2000, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: **“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”** y **“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”**.

Una vez expuesto lo anterior, este Tribunal por cuestión de método y para mayor claridad, sintetizará los agravios del accionante en los siguientes términos:

a) Precisión sobre la determinancia general del medio de impugnación.

Argumenta el partido político actor que la nulidad de la votación en una o varias casillas, sólo puede actualizarse cuando se haya acreditado plenamente la causal que se haga valer por el compareciente, siempre y cuando los errores, inconsistencias o irregularidades que lleguen a detectarse, sean determinantes para el resultado de la votación; en el entendido de que el requisito de determinancia puede ser valorado desde dos aspectos: el cuantitativo y el cualitativo.

En el caso, refiere que el requisito de determinancia se satisface, desde un aspecto cualitativo, ya que el partido político que representa se encuentra en posibilidad de perder su registro al no alcanzar el porcentaje mínimo de votos que establece la ley, para la conservación del registro; por lo cual, deberá tenerse por actualizado el elemento de determinancia en el resultado de la votación por este Tribunal, desde esta perspectiva, y desde este punto se deberá partir para resolver si opera o no la conservación de su registro.

Esto es, considera que la determinancia debe apreciarse en su efecto indirecto respecto de la votación necesaria para la preservación de su registro como partido político.

Cita como sustento de lo anterior, la tesis del rubro **“DETERMINANCIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO NECESARIO PARA CONSERVAR SU REGISTRO, DEBE SER OBJETO DE ESTUDIO AL MOMENTO DE ANALIZAR ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL”**.

b) Solicitud de recuento de la votación recibida en casillas en sede jurisdiccional.

En este apartado, el partido quejoso alega que, durante la celebración de la sesión de cómputo distrital, el representante de Fuerza por México solicitó el recuento de la votación recibida en todas las casillas; petición que le fue rechazada.

Añade que durante la revisión realizada de los paquetes electorales en los que se permitió la apertura en el Consejo Distrital, el representante del partido quejoso, y los auxiliares de las mesas de trabajo, advirtieron una conducta reiterada para llevar a cabo acciones que llevaron a la nulidad de un número indeterminado de votos en favor de su representado y candidatos postulados por éste.

Es decir, que en las boletas en las que el electorado manifestó su intención y voluntad por sufragar en favor de su representado, se realizaron inscripciones o alteraciones para considerar dichas boletas como nulas, debiéndose haber tomado a su favor; situación que, a su juicio, altera de forma evidente y clara el resultado de las votaciones; por lo cual se solicita la apertura del resto de los paquetes electorales que no fueron objeto de recuento en la sede administrativa electoral.

También discute que durante el cómputo distrital se presentaron diversas irregularidades e inconsistencias entre los resultados consignados en las actas de casilla y los resultados electorales preliminares (PREP), que generan duda fundada y razonable en el resultado de la elección, por lo que el nueve de junio del año en curso, el Comité Directivo Estatal del partido quejoso, solicitó el recuento total de los votos en la sede administrativa; y por ello, solicita a este Tribunal, el recuento de las casillas descritas en la página 9 del escrito de queja.

La pertinencia de la petición de mérito, a su juicio, se sustenta en el hecho de que, derivado de lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones federativas, siempre y cuando obtengan, mínimamente, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en la elección que participe; situación que, a su juicio, amerita la actuación excepcional y extraordinaria de este Tribunal, por considerarse un hecho determinante para la subsistencia del instituto político que representa.

Cita como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 14/2004, del rubro "**PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL**".

c) Actualización de la causal de nulidad consistente en haber mediado error o dolo en la computación de los votos.

Alega que en el caso debe decretarse la nulidad de una casilla, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el inciso f), párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Señala que la casilla que se ubica en este supuesto corresponde la identificada como: 888B1.

Añade que la causal de nulidad citada se actualiza cuando se conjugan los dos elementos que la componen: a) Haber mediado error o dolo en la computación de los votos y, b) Que ello sea determinante para el resultado de la votación.

En relación con lo anterior, destaca que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la causa de nulidad en estudio se acredita cuando en los rubros fundamentales existen irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia entre los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva, como son:

- La suma total de personas que votaron y representantes de los partidos políticos que votaron en dicha casilla, sin estar incluidos en la lista nominal (total de ciudadanos que votaron).
- Total de boletas sacadas de las urnas (boletas depositadas) y
- El total de los resultados de la votación (votación emitida).

Rubros que refiere están estrechamente vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, ya que en condiciones normales el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos depositados y extraídos de la urna, en el entendido de que, si existe discrepancia entre esos rubros, ello debe traducirse en el error en el cómputo de los votos; de ahí que solicite la nulidad de la votación recibida en las casillas previamente mencionadas. Cita como sustento de sus

alegaciones, la jurisprudencia del rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES".

d) Violación a principios constitucionales

En este apartado, alega el partido político actor que en la elección impugnada se actualizó una vulneración grave a los principios constitucionales que deben regir los procesos electorales, principalmente los de legalidad y equidad en la contienda, con motivo de la difusión de mensajes por parte de diversas personas de renombre público, denominadas "influencers" y que enumera en su escrito de queja.

Al respecto, sostiene que la violación a los mencionados principios deriva del hecho de que diversos "influencers" que menciona en su escrito de queja, emitieron mensajes de apoyo y/o llamado al voto a favor del partido político Verde Ecologista de México, en el periodo de veda electoral, en contravención del artículo 251, párrafos tercero, cuarto y quinto, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En relación con lo anterior, sostiene que debe tomarse en cuenta que no es la primera ocasión que dicho instituto político recurre a este tipo de actos y que le ha representado un beneficio de posicionamiento político, sin que les haya deparado mayor perjuicio que una sanción económica; razón por la cual asumen el riesgo mínimo de romper las reglas de propaganda política electoral.

Asimismo, refiere que se debe tomar en cuenta que los mensajes trascendieron a un número exponencial de personas, debido al total de personas seguidoras que cada una de las mencionadas cuentas de los "influencers" representa, y que cada uno de sus seguidores pudo haber compartido el mensaje del "influencer" de que se trate, lo que genera una vulneración exponencial de dimensiones descomunales.

En relación con lo anterior, destaca lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia con clave SUP-REP-89/2016, en la que se analizó una conducta similar por parte del instituto político Verde Ecologista de México, en el proceso electoral ordinario 2015, en la que se resolvió que la difusión de mensajes en el periodo de veda electoral, a través de redes sociales, puso en peligro los principios constitucionales que rigen la materia electoral, necesarios para la validez de la elección.

e) Petición de nulidad de la elección

En este apartado, sostiene que, de resultar fundada la nulidad de casillas en un número suficiente para ello, solicita la **nulidad de la elección**, de conformidad con los artículos 41, Base VI, de la Constitución Federal, y 76, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (siendo su correlativo el artículo 320, de la ley estatal electoral).

SÉPTIMO. Estudio de fondo. A juicio de este Tribunal, el análisis de las constancias sumariales, en relación con los agravios formulados por el partido político actor, permite concluir que éstos son por una parte **infundados** y por otra **inoperantes**; por ende, **improcedentes** para modificar o revocar los actos impugnados, por lo que se impone su **confirmación**, por las razones que pasan a explicarse.

1. Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de la elección.

De entrada, debe puntualizarse que para realizar el estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casillas y de la elección impugnada, se hará tomando en consideración que el elemento “determinante” deberá colmarse en todos los supuestos, pues este elemento se encuentra implícito en todas aquellas hipótesis jurídicas en las que no se contemple de forma expresa.

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de rubro: **“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”**.⁶

La cual precisa que el señalamiento expreso o implícito del elemento determinante repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante para el resultado de la votación.

En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito significa que —por la

⁶ Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en <http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx>

magnitud del hecho irregular o la dificultad de su prueba— existe la presunción *iuris tantum* de que la irregularidad es “determinante” para el resultado de la votación; sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se actualizará la nulidad.

Para analizar el elemento determinancia, se utilizará cualquiera de los dos criterios siguientes:

- Cuantitativo o aritmético
- Cualitativo

Lo anterior, sin perder de vista “*el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados*”, al momento de analizar el elemento determinancia.

Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de rubros **"NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO"**⁷ y **"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"**⁸.

El principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “*lo útil no debe ser viciado por lo inútil*”, se caracteriza por los aspectos fundamentales siguientes:

- a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y
- b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e

⁷ Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45; y en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/

⁸ Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20; y en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/

imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

Así, dicho principio de conservación de los actos válidamente celebrados parte de la base de que no cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o elección.

Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, esto, en relación con el elemento denominado determinante.

El criterio cuantitativo o aritmético se basa en factores numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, ya que, de no presentarse la irregularidad, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar podría alcanzar el mayor número de votos.

El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren la afectación del bien jurídico tutelado en cada causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente en que la irregularidad sea determinante.

- ↓ Análisis del apartado que la parte recurrente denomina **“PRECISIÓN SOBRE LA DETERMINANCIA GENERAL DEL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN”**.

Los argumentos identificados con el **inciso a)**, a juicio de este Tribunal devienen inatendibles frente a lo establecido en la jurisprudencia 9/98 de la Sala Superior de Este Tribunal, de rubro: **“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.**

Ello, porque conforme a dicho criterio de observancia obligatoria, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "*lo útil no debe ser viciado por lo inútil*", la nulidad de la votación recibida en alguna casilla sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean **determinantes** para el resultado de la votación.

Asimismo, se precisa que la nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por irregularidades e imperfecciones menores, máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.

No es óbice para concluir lo anterior, lo establecido en la tesis relevante invocada por la parte actora L/2002 de rubro: "***DETERMINANCIA. LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO NECESARIO PARA CONSERVAR SU REGISTRO, DEBE SER OBJETO DE ESTUDIO AL MOMENTO DE ANALIZAR ESTE REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL***", en el sentido de que debe ser objeto de análisis al momento de verificar si el juicio de revisión constitucional electoral cumple con el requisito de determinancia contenido en el artículo 99 de la Constitución Federal, el hecho de que la recomposición del resultado final de la votación pueda afectar sustancialmente el porcentaje de votación necesario para que un partido político conserve o pierda el registro o reconocimiento en la entidad.

Ello, porque el criterio contenido en la tesis relevante sería inaplicable al caso concreto, pues la determinancia a la que se refiere es a la que se exige como requisito de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral y no a la determinancia como elemento configurativo de las causales de nulidad de votación recibida en casilla.

Análisis del agravio relativo a la petición de recuento jurisdiccional total parcial de casillas.

A juicio de este Tribunal, el **agravio b)** antes reseñado, resulta **infundado**, por las razones que pasan a explicarse.

En el escrito de demanda el partido Fuerza por México, alega que es procedente el “recuento” de dos casillas, sobre la base de que, durante la celebración de la sesión de cómputo distrital, el representante de Fuerza por México solicitó el “recuento” de la votación recibida en **todas** las casillas, y que dicha petición le fue rechazada.

Añade que durante la revisión realizada de los paquetes electorales en los que se permitió la apertura en el Consejo Distrital, el representante del partido quejoso, y los auxiliares de las mesas de trabajo, advirtieron una conducta reiterada para llevar a cabo acciones que llevaron a la nulidad de un número indeterminado de votos en favor de su representado y candidatos postulados por éste.

Es decir, que en las boletas en las que el electorado manifestó su intención y voluntad por sufragar en favor de su representado, se realizaron inscripciones o alteraciones para considerar dichas boletas como nulas, debiéndose haber tomado a su favor; situación que, a su juicio, altera de forma evidente y clara el resultado de las votaciones; por lo cual se solicita la apertura del resto de los paquetes electorales que no fueron objeto de recuento en la sede administrativa electoral.

También discute que durante el cómputo distrital se presentaron diversas irregularidades e inconsistencias entre los resultados consignados en las actas de casilla y los resultados electorales preliminares (PREP), que generan duda fundada y razonable en el resultado de la elección, por lo que el nueve de junio del año en curso, el Comité Directivo Estatal del partido quejoso, solicitó el “*recuento total*” de los votos en la sede administrativa; y por ello, solicita a este Tribunal, el **recuento jurisdiccional** de las siguientes casillas:

#	Casilla
1)	806S1
2)	888B1

La pertinencia de la petición de mérito, a su juicio, se sustenta en el hecho de que, derivado de lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones federativas, siempre y cuando obtengan, mínimamente, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en la elección que participe; situación que, a su juicio, amerita la actuación excepcional y extraordinaria de este Tribunal,

por considerarse un hecho determinante para la subsistencia del instituto político que representa.

Cita como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 14/2004, del rubro "**PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL**".

A juicio de este Tribunal, como ya se adelantó, resulta **infundado** el agravio que se atiende, por las razones siguientes:

Marco normativo aplicable

El artículo 367 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dispone que las reglas para el **recuento total o parcial de votación en el ámbito jurisdiccional**, se establecerán en el Reglamento que para tal efecto emita el Tribunal Estatal, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso I), de la Constitución Federal.

En el capítulo I⁹ del título cuarto,¹⁰ del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, se encuentra previsto y regulado el recuento jurisdiccional de votos de una elección, en sus modalidades de total y parcial.

El artículo 56 del Reglamento en cita, previene que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral constitucional referido, y el ordinal 367 de la Ley estatal de la materia, el Tribunal podrá llevar a cabo **recuentos parciales o totales** de votación, atendiendo a las siguientes reglas o requisitos de procedencia:

Recuento jurisdiccional total	
Para poder decretar la realización de recuentos totales de votación de las elecciones de Gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, se observará lo siguiente:	
a)	Deberá ser solicitado por escrito dentro del recurso de queja;
b)	Que el resultado de la elección en la cual se solicite el recuento total, arroje una diferencia entre el primer y segundo lugar, menor a un punto porcentual, y
c)	Que el Consejo General del Instituto o los Consejos Municipales y Distritales no hubiesen realizado, sin causa justificada , el recuento de votos a que se refieren los artículos 246, 251 y 257 de la Ley.
Cumplidos los requisitos señalados, el Tribunal llevará a cabo el recuento total de la elección correspondiente y procederá a	

⁹ Titulado "DEL RECUENTO PARCIAL Y TOTAL DE VOTOS DE UNA ELECCIÓN".

¹⁰ Denominado "DEL RECUENTO JURISDICCIONAL".

declarar al ganador de la elección, ordenando que se emita la constancia de mayoría respectiva.

Cómputo parcial	
Para decretar la realización de cómputos parciales de votación, el mismo precepto legal dispone que se observará lo siguiente:	
a)	Deberá ser solicitado por escrito dentro del recurso de queja; y
b)	Que el Consejo General del Instituto o los Consejos Municipales y Distritales no hubiesen realizado, sin causa justificada , el recuento de votos previsto en los artículos 245, 251 y 257 de la Ley.

Como vemos, en ambos casos, uno de los requisitos para que proceda llevar a cabo el recuento de la votación en las modalidades señaladas, es cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, o los Consejos Municipales y Distritales no hubiesen realizado, **sin causa justificada**, el recuento de votos conforme a lo previsto en los artículos 245 (nuevo escrutinio y cómputo), 246 (recuento total), 251 y 257 de la Ley estatal de la materia (según corresponda).

El ordinal 251 de la ley en cita, establece que el **cómputo distrital de la votación para diputados** se sujetará al procedimiento establecido en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de los artículos 245 y 246 de la presente Ley; y que la suma de los resultados obtenidos, después de realizar las operaciones indicadas en fracciones anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.

A su vez, en lo que aquí interesa, el **artículo 245**, fracciones IV, V y VI, de la ley en cita, dispone:

“ARTÍCULO 245.- El cómputo estatal para la elección de Gobernador, es el procedimiento por el cual, el Consejo General determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla, la votación obtenida en la elección de Gobernador. El cómputo estatal de la votación para Gobernador del estado, se sujetará al procedimiento siguiente:

....
 IV.- Si los resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente, tomando en cuenta en su caso, lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 99 de la presente Ley. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar

la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta, las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo General, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Estatal el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

V.- El Consejo General deberá realizar, nuevamente, el escrutinio y cómputo cuando:

- a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
- b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y
- c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido o candidato.

VI.- A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;

...

Mientras que el numeral 246 de la ley en cita, literalmente dispone:

“ARTÍCULO 246.- Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido político, coalición o candidato independiente que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo General deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación, ante el Consejo, de la sumatoria de resultados por partido político, coalición o candidato independiente consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección;

Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo General deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

Conforme a lo establecido en los dos párrafos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo General dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes de 3 días naturales. Para tales efectos, el presidente dará aviso inmediato al Secretario; el Consejo General ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos

independientes. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos, en forma proporcional, los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.

Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido político, coalición o candidato.

El presidente realizará, en sesión plenaria, la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Estatal.

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento”.

La interpretación sistemática de las normas transcritas nos permite arribar a las siguientes conclusiones:

1) En el supuesto de un nuevo escrutinio y cómputo lo siguiente:

Los Consejos, ya sea General, Municipales o Distritales, como en el caso, procederán a realizar un nuevo escrutinio y cómputo de una casilla cuando:

- Los resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla
- No existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente.

En estos supuestos se debe levantar el acta correspondiente, tomando en cuenta, en su caso, lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 99 de la presente Ley.

Asimismo, se establece que para llevar a cabo lo anterior, el secretario abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero

electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General.

También se precisa que los resultados se anotarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta, las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo General, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Estatal el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

En la fracción V del ordinal en cita, se establece, además, que el Consejo General (en el caso el Consejo Distrital), deberá realizar, nuevamente, el escrutinio y cómputo cuando:

- a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;
- b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y
- c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido o candidato.

A continuación, se indica que se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva.

2) En el supuesto de recuento total lo siguiente:

Que cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido político, coalición o candidato independiente que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo General, Municipal o Distrital, en su caso, deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación, ante el Consejo, de la sumatoria de resultados por partido político, coalición o candidato independiente consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección;

Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo General, Municipal o Distrital, según sea el caso, deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

Conforme a lo establecido en los dos párrafos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo respectivo dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes de 3 días naturales. Para tales efectos, el presidente dará aviso inmediato al Secretario; el Consejo General ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales, los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos, en forma proporcional, los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

Asimismo, se dispone claramente que los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Estatal y, que en ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento.

Ahora bien, retomando la premisa inicial, no se debe perder de vista que, para que proceda el **recuento jurisdiccional total o parcial**, previsto en los artículos 367 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y 56 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se deben satisfacer ciertos requisitos de procedencia, entre ellos:

- Que se solicite por escrito dentro del recurso de queja y,
- Que el Consejo General del Instituto o los Consejos Municipales y Distritales no hubiesen realizado, **sin causa justificada**, el recuento de votos a que se refieren los artículos 245, 246, 251 y 257 de la Ley (según corresponda).

Esto es, que previamente se hubiese solicitado en tiempo y forma, en el caso, al Consejo Distrital Electoral de que se trate, y que éste se hubiese negado a realizarlo, pese a que se actualizaba alguno de los supuestos de procedencia, previstos en los numerales 245 o 246, previamente explicados.

Caso concreto.

A juicio de este Tribunal que el agravio identificado con el inciso b), en el que se alega que debe decretarse el "recuento" de diversas casillas, es infundado por las diversas razones que pasan a explicarse.

En primer lugar, carece de razón la Presidenta del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México, cuando alega que en la sesión de cómputo distrital, se pidió por el representante del citado partido político, el **recuento en todas las casillas** y que la petición fue rechazada; toda vez que, del análisis íntegro del ***"ACTA NÚMERO 10 SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRICTAL ELECTORAL 17 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021"***, así como del ***"ACTA NÚMERO 08 SESIÓN PERMANENTE DE LA JORNADA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRICTAL ELECTORAL 17 CON CABECERA EN CAJEME, SONORA, CELEBRADA EN FECHA 06 DE JUNIO DE 2021"***.

Pruebas a las que se les confiere valor probatorio pleno, al constituir documentales públicas expedidas o elaboradas por funcionarios electorales competentes para ello, de conformidad con lo previsto por el párrafo primero, fracción I y párrafo tercero, fracciones II y III, del artículo 331 de la ley en cita; mismas que, en conjunto, permiten concluir que el representante del partido Fuerza por México (propietario y/o suplente), no estuvo presente en ninguna de dichas sesiones, como se denota claramente de los apartados relativos al pase de lista de los representantes de los partidos políticos; por consecuencia, menos aún solicitó en alguna de dichas sesiones el recuento total o de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida.

En segundo lugar, se estiman **infundadas** las alegaciones del partido político actor, en las partes donde discute que:

- a) Durante la revisión realizada de los paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital Electoral, se suscitó una acción reiterada para acarrear la nulidad de un número indeterminado de votos a favor del partido político que representa y de los candidatos postulados por éste.

b) Que se realizaron inscripciones o alteraciones en los votos emitidos a favor de su representado, para que fuesen clasificados como nulos.

c) Que durante el cómputo distrital se presentaron diversas irregularidades e inconsistencias entre los resultados consignados en las actas de casilla y los resultados electorales preliminares (PREP), que generan duda fundada y razonable en el resultado de la elección, por lo que el nueve de junio del año en curso, el Comité Directivo Estatal del partido quejoso, solicitó el recuento total de los votos en la sede administrativa.

Ello, en virtud de que, al no encontrarse presente en las sesiones señaladas, el representante propietario o suplente del partido político actor, no puede ahora afirmar o constarle que se realizó una petición de recuento total de casillas y que se suscitaron las irregularidades o inconsistencias que señala; justamente porque riñe con la lógica y el sentido común que, ante su ausencia probada en ambas sesiones referidas, alegue la formulación oportuna de la petición aludida, como la existencia de las irregularidades que describe en su escrito de queja, antes precisadas.

En tercer lugar, se estima **infundado** el agravio en análisis, toda vez que, pese a lo ya destacado, el partido político actor acude a este Tribunal, solicitando a través del recurso interpuesto, el recuento jurisdiccional parcial de las casillas **806S1** y **888B1**; aduciendo las citadas irregularidades o inconsistencias; empero, incumplió con la carga procesal conforme a la cual, el que afirma está obligado a probar; es decir, se encontraba constreñido a cumplir con las cargas de su afirmación y de la demostración, en términos de lo previsto por los artículos 327, fracción VIII y 332, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

Esto es, se encontraba compelido a aportar las pruebas conducentes a demostrar que se suscitaron las irregularidades o inconsistencias delatadas, que obligaban a la autoridad administrativa electoral a realizar el nuevo escrutinio y cómputo o el recuento total de la votación recibida, al actualizarse los supuestos previstos en los numerales 245 (primer supuesto) y 246 (segundo supuesto), ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y que se realizó la petición oportuna pero que ésta no fue atendida o fue rechazada de forma ilegal; a fin de que este Tribunal estuviese compelido a realizar el recuento jurisdiccional alegado, a la luz de los artículos 367 de la ley secundaria en cita, y 56

del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral; gravamen procesal que, se insiste, no fue satisfecho por el partido político quejoso.

En efecto, el cumplimiento de esta carga procesal permite, que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las afirmaciones de las partes se encuentran demostradas a través de los medios de prueba aportados al proceso, lo que en el caso no cumplió el instituto político recurrente, menos aun cuando ni siquiera estuvo presente su representante en las sesiones llevadas a cabo por el Consejo Distrital respectivo, antes destacadas.

De manera que, si el partido político actor, en el presente recurso no aporta razones y elementos ante este Tribunal que actualicen los supuestos mencionados, resulta evidente que el agravio planteado no puede prosperar al resultar genérico y aislado, y sin que se trate de los supuestos previstos en la ley.

En último lugar, y no por ello menos importante, se debe estimar **infundado** el agravio identificado con el **inciso b)**, en el que la parte impugnante argumenta que procede el recuento jurisdiccional de las casillas **806S1** y **888B1**; toda vez que éstas ya fueron objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por la autoridad administrativa electoral, siguiéndose las directrices del artículo 245 de la ley electoral local, y apartado II.4, de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral ordinario local 2020-2021, como se desprende de las documentales públicas consistentes en copias certificadas de las constancias individuales de resultados electorales de puntos de recuentos de la elección para las diputaciones locales.

Lo que se robustece con lo asentado en el original del acta número 10, correspondiente a la "*sesión especial de cómputo del consejo distrital electoral 17 con cabecera en Cajeme, Sonora, celebrada el día nueve de junio del 2021*", en la que aparece que se asentaron los resultados derivados del nuevo escrutinio y cómputo de las casillas aludidas, por parte del Consejo respectivo, sin que se formularan al respecto manifestaciones en contra por parte de los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos presentes.

Pruebas a las se les confiere valor probatorio pleno, al constituir documentales públicas expedidas o elaboradas por funcionarios electorales competentes para ello, de conformidad con lo previsto por el párrafo primero, fracción I y párrafo tercero fracciones II y III, del artículo 331 de la ley en cita.

En este tenor, debe concluirse que las inconsistencias o errores advertidos en las actas de escrutinio y cómputo de dichas casillas, fueron ya subsanadas por la autoridad responsable al llevar a cabo su nuevo escrutinio y cómputo; por consiguiente, el partido político actor ya no puede solicitar a este Tribunal que realice nuevamente su escrutinio y cómputo, a la luz de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 246 de la ley electoral local, en relación con el numeral 251 de la misma legislación.

No es óbice a las anteriores conclusiones que, el partido político actor alegue que la petición de recuento jurisdiccional se sustenta en que alcanzó una votación de 2.15 por ciento, y que para conservar su registro debió obtener un mínimo de votación equivalente al 3 por ciento; situación que a su juicio amerita la actuación excepcional y extraordinaria de este Tribunal, por considerarse un hecho determinante para la subsistencia del instituto quejoso, citando como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 14/2004, del rubro **“PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL”**.

No obstante, en términos de la tesis **LXXIV/2015** de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: **“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO TOTAL. LA FALTA DE PREVISIÓN DE SU REALIZACIÓN POR LA SUPUESTA PÉRDIDA DE REGISTRO DE UN PARTIDO POLÍTICO, ES ACORDE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”**, la causal invocada por el Partido Fuerza por México de considerar viable el recuento jurisdiccional parcial o total de los votos a partir del riesgo de perder su registro como partido político, no corresponde a las hipótesis normativas aplicables para la realización del recuento jurisdiccional en sus vertientes de total o parcial, y no implica que su falta de previsión como supuesto de procedencia, conlleve a que no exista certeza sobre los resultado electorales.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de rubro **“PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL”**, lejos de apoyar su petición de recuento jurisdiccional de ciertas casillas, contribuye a reafirmar que, en el caso, es improcedente la petición en análisis, pues en ella claramente se estipula que la apertura de los paquetes electorales integrados con motivo de la elección de que se trate, es una medida última, excepcional y extraordinaria, que únicamente tiene verificativo cuando, a juicio del órgano jurisdiccional del conocimiento, la gravedad de la cuestión controvertida así lo exige, su eventual desahogo pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo —como ocurriría si pudiese ser determinante para el resultado de la elección—, y siempre que, además, habiéndose agotado

todos los medios posibles para dilucidar la situación, sólo se pueda alcanzar certidumbre a través de tal diligencia.

Requisitos que se estima por este Tribunal, no se satisfacen por el simple hecho de que el impugnante alegue que ello es necesario al constituir un mecanismo que le puede permitir alcanzar la votación del tres por ciento que como mínimo contempla la ley para la conservación del registro, como si lo serían los casos expresamente previstos en los numerales 245 y 246 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, previamente precisados, en el caso de nuevo escrutinio y cómputo o recuento total *en sede administrativa*, o bien, la actualización de los supuestos previstos en el numeral 56 del Reglamento Interior de este Tribunal, para llevar a cabo el recuento en la *sede jurisdiccional*.

Supuestos ya descritos y que, al actualizarse, autorizan a este Tribunal a llevar a cabo un recuento jurisdiccional, en sus vertientes de total o parcial, para dar certeza a la votación recibida, ello claramente con el objeto de evidenciar plena certeza de que la auténtica voluntad popular es la que regirá en la elección del ciudadano que ha de ejercer el poder público.

Atento a lo anterior, la presunta pérdida del registro de un partido político no genera la falta de certeza en los resultados electorales, como claramente se estableció por la Sala Superior en la tesis previamente citada.

En mérito de todo lo anterior, se declara **infundado** el agravio identificado con el **inciso b)**, al no resultar procedente la petición de nuevo escrutinio y cómputo de las casillas antes mencionadas.

Análisis del agravio relacionado con la causal de nulidad por mediar error o dolo en el cómputo de votos

Sobre esta temática, en el agravio identificado con el **inciso c)**, el partido político actor invoca la nulidad de la votación recibida en una casilla, de la cual refiere que se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 319, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que dispone:

“**ARTÍCULO 319.-** La votación recibida en una casilla será nula:

...

IV.- Por haber mediado error o dolo manifiesto en el cómputo de votos, que modifique substancialmente el resultado de la votación en la casilla;
...”

La casilla impugnada es la que se precisa en la siguiente tabla:

#	Casilla
1)	888B1

El **agravio c)** se estima **infundado**, toda vez que la misma ya fue motivo de nuevo escrutinio y cómputo por parte del Consejo Distrital y no hay argumento de la parte recurrente que refiera expresamente que el error persiste.

En efecto, de las constancias que obran en el expediente aportadas por la autoridad responsable, se cuenta con la constancia individual de resultados electorales del punto de recuento de la elección para las diputaciones locales, de la casilla impugnada en este apartado; misma que adquiere valor probatorio pleno, al constituir una documental pública expedida por personas facultadas para ello, de conformidad con lo estipulado por el párrafo primero, fracción I y párrafo tercero, fracciones II y III, del artículo 331 de la ley en cita.

En este tenor, tomando en cuenta que las inconsistencias o errores advertidos en el acta de escrutinio y cómputo de dicha casilla, fueron ya subsanadas por la autoridad responsable al llevar a cabo su nuevo escrutinio y cómputo, siguiéndose las directrices del artículo 245 de la ley electoral local, y apartado II.4, de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral ordinario local 2020-2021, tales errores ya no pueden invocarse como causal de nulidad ante este Tribunal, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 246, en relación con el 251, ambos de la ley estatal de la materia; lo que torna en **infundado** el agravio expresado, en lo que a la casilla arriba invocada concierne.

Análisis del agravio relativo a la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales.

El partido Fuerza por México pretende que se declare la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, en particular los de equidad en la contienda y legalidad, porque no se respetó la veda electoral.

Lo anterior, porque el seis de junio—día que está comprendido dentro del periodo de veda electoral— hubo difusión de mensajes con contenido que buscaban beneficiar y posicionar electoralmente al Partido Verde Ecologista de México. Esos mensajes e imágenes los emitieron personalidades públicas conocidas como *influencers*, a través de sus cuentas en Twitter -según el dicho del actor-, vulnerando con ello, el artículo 251, párrafos 3, 4 y 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En concepto del partido político actor, dichos actos irregulares fueron determinantes para el resultado de la elección de diputados en el distrito electoral 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, debido a que:

- No es la primera ocasión que el partido Verde Ecologista de México realiza actos de este tipo, es un *modus operandi* que le ha representado un beneficio.
- Por el número de seguidores que tienen los *influencers* en las redes sociales, resultan ser un atractivo extraordinario y con un impacto social trascendente de los mensajes que difundan.
- Para analizar la conducta no basta con considerar el número de personas que difundieron el mensaje, sino que trasciende a un número exponencial. Pues cada seguidor pudo haber compartido el video de los *influencers*.
- El riesgo exponencial lo ha abordado la Sala Superior en el SUP-REP-89/2016. Donde puso de relieve el temor a vulnerar los principios de legalidad y equidad
- En el caso, está la información contenida y publicada en el perfil de Twitter "WHAT THE FAKE"; y el actor menciona algunas cifras de seguidores de las cuentas.

Para acreditar su dicho, el partido actor en su demanda hace una relación de ciento dos (102) cuentas de "Twitter" que, a su decir, pertenecen a personas famosas. También, refiere un perfil de twitter "what the fake" en el que afirma existe una recopilación de todas las intervenciones de los *influencers*.

9 Marco jurídico.

Antes de analizar dicho planteamiento, resulta necesario explicar en qué consiste el periodo de veda electoral, los principios que se tutelan a través de ésta y los elementos para la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales.

A) Veda electoral. El artículo 22, párrafo veintitrés, de la Constitución Local, prevé que la ley establecerá las reglas para la realización de las campañas electorales. Asimismo, prevé que, en todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador, y de treinta a sesenta días, cuando sólo se elijan diputados o ayuntamientos.

También se prevé en el mismo precepto constitucional, en su párrafo veintiséis, que el Tribunal Estatal Electoral será competente para conocer de los procedimientos sancionadores en materia electoral (ordinario y oral sancionador), derivado de violaciones a la normativa electoral; entre ellas, llevar actos de campaña en el periodo de veda electoral, como más adelante se explica.

Como se ve, la Ley Fundamental Estatal establece que las campañas electorales se deben desarrollar conforme lo establezca la ley y limita su duración a un lapso específico. Asimismo, dispone que la vulneración a lo ordenado debe ser sancionado.

En concatenación con lo anterior, el artículo 7, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, indica que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y que están prohibidos todos los actos que generen presión o coacción sobre los electores.

El artículo 159 de la misma ley prevé que las etapas del proceso electoral son: la preparación de la elección; la jornada electoral; los resultados y declaración de validez de las elecciones.

Asimismo, dispone que la etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General del referido Instituto celebre durante la primera semana del mes de septiembre del año previo al en que deban realizarse las elecciones ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.

Ahora bien, dentro de la etapa de preparación de la elección se da el periodo de campañas.

De conformidad con el artículo 208, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados para la obtención del voto.

También se define a los actos de campaña y a la propaganda electoral. Lo primero se precisa como las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano.

Por su parte, la propaganda electoral se delimita como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general.

El artículo 224, fracción II, de la ley estatal de la materia, prevé que las campañas electorales, tratándose de diputados por el principio de mayoría relativa, representación proporcional y ayuntamientos, iniciarán 43 días antes de la fecha de la jornada electoral.

Asimismo, se precisa que, en todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral, y que el día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo de carácter electoral.

Como se ve, dentro de la etapa de preparación de la elección se lleva a cabo la fase de campañas electorales. En dicha fase los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos pueden llevar a cabo actos con el fin de obtener el voto. Dentro de los actos que pueden llevar a cabo se encuentran la difusión de propaganda electoral y los actos de campaña.

Ahora bien, de acuerdo con los artículos expuestos, la fase de campaña electoral inicia 43 días antes de la fecha de la jornada electoral, y debe terminar tres días antes de esta última fecha. De tal modo desde tres días antes de la jornada está prohibida la celebración de actos de campaña y la difusión de propaganda electoral.

Lo que se corrobora con lo dispuesto en los artículos 166 y 206 de la ley estatal de la materia.

De tal modo, la restricción a la propaganda el día de la jornada electoral y durante

los tres días anteriores, específicamente, cuando su ejercicio tenga como propósito, la difusión de contenidos electorales en el referido periodo tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que el voto del ciudadano se dé libremente sin recibir ningún tipo de presión.

En este sentido, el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto persigue que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano.

Por tanto, la vulneración a la prohibición aludida puede afectar a la equidad a la contienda, así como al principio de libertad del voto.

B) Elementos de la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales

No obstante, las consideraciones expuestas en el inciso anterior, para alcanzar la invalidez o nulidad de una elección no basta con acreditar los hechos o actos irregulares, ya que, es necesario que concurren los factores cualitativo y cuantitativo del carácter determinante de la irregularidad; es decir, que se acredite la vulneración a determinados principios constitucionales y definir si tal vulneración definió el resultado de la elección.

A efecto de precisar lo anterior, debe mencionarse que en la llamada causa de invalidez por violación a principios constitucionales, derivada de la interpretación que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece mandamientos respecto de los cuales debe ceñirse la actividad del Estado, pues en ellas se disponen, en forma general, valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia del Estado.

Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual, aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia de éste, así como del orden público.

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

Las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que también contienen normas vigentes y exigibles.

Consecuentemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que una elección de mayoría relativa puede declararse inválida o nula por la conculcación de principios o valores constitucionalmente previstos.

Los elementos o condiciones de la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales son:¹¹

- a. Que se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o bien parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);
- b. Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas;
- c. Que se constate el grado de afectación que la violación haya producido dentro del proceso electoral, respecto a los principios o normas constitucionales o parámetro de Derecho Internacional aplicable.
- d. Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Estos requisitos permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como de la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares.

¹¹ Ver sentencia SUP-JIN-359/2012.

Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano.¹²

En tal contexto, la declaración de validez o invalidez de una elección deriva no sólo de las facultades específicas previstas en la legislación electoral, sino también de los principios y valores constitucionales y de los derechos fundamentales previstos constitucionalmente y en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, entre los que se reconocen los derechos político-electorales de votar y ser votado en elecciones populares periódicas, auténticas y libres, llevadas a cabo mediante sufragio directo, universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Bajo este contexto, a continuación, se analizarán los argumentos concretos que al respecto hace valer el partido político actor.

Caso concreto.

Fuerza por México pretende que se anule la elección de diputado local del distrito 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, al configurarse, en su criterio, la violación a diversos principios constitucionales dada la injerencia de los *influencers* que manifestaron su apoyo en favor del Partido Verde Ecologista de México, en periodo de veda electoral.

Este Tribunal considera inoperante el agravio planteado.

Lo anterior, porque, aunque fueran ciertos los hechos de que el seis de junio –día que está comprendido dentro del periodo de veda electoral– hubo difusión de mensajes por parte de personalidades públicas conocidas como *influencers*, a través de sus cuentas en la red social indicada, con contenido que buscaban beneficiar y posicionar electoralmente al Partido Verde Ecologista de México; este es uno de varios elementos que se necesitan para la invalidez pretendida.

¹² Véase la Jurisprudencia 20/2004 de rubro: **SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES.**

Sin embargo, el partido actor incumple con acreditar plenamente que esas violaciones o irregularidades fueron determinantes para el resultado de la elección.

Conviene tener presente que el artículo 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que quien afirma algún hecho está obligado a probarlo, atento a ello y tratándose de la existencia de irregularidades o violaciones sustanciales que pongan en duda la validez de una elección, la carga de la prueba reviste una especial relevancia.

Elo porque, como se precisó, para decretar la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales, es menester que, además de acreditar plenamente la irregularidad o violación en cuestión, se constate el grado de afectación que la violación haya producido dentro del proceso electoral.

Ahora, si bien el partido actor señala un perfil donde refiere se contienen recopilados los videos por parte de las personas conocidas como *influencers* donde hacen difusión electoral en beneficio del Partido Verde Ecologista de México, lo cierto es que dichos elementos son insuficientes para demostrar que se haya trastocado el principio de equidad al grado de ser determinante cualitativa y cuantitativamente para el resultado de la elección, de ahí que, en el caso, no exista el caudal probatorio y argumentativo suficiente para acreditar la invalidez de la elección en estudio.

En efecto, porque, por una parte, el partido actor se limita a decir:

- No es la primera ocasión que el Partido Verde Ecologista de México realiza actos de este tipo, es un *modus operandi* que le ha representado un beneficio.
- Por el número de seguidores que tienen los *influencers* en las redes sociales, resultan ser un atractivo extraordinario y con un impacto social trascendente de los mensajes que difundan.
- Para analizar la conducta no basta con considerar el número de personas que difundieron el mensaje, sino que trasciende a un número exponencial. Pues cada seguidor pudo haber compartido el video de sus *influencers*.

- El riesgo exponencial lo ha abordado Sala Superior en el SUP-REP-89/2016. Donde puso de relieve el riesgo a vulnerar los principios de legalidad y equidad.
- En el caso, está la información contenida y publicada en el perfil de Twitter "WHAT THE FAKE"; y el actor menciona algunas cifras de seguidores de las cuentas.

Aunque el actor refiera a dichas acciones, no debe perderse de vista que para llegar a la sanción de invalidez de la elección además se requiere que sean determinantes para el resultado.

Toda vez que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas sentencias, ha sostenido que el internet, red informática mundial, es un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y que su utilización ha permitido una descentralización extrema de la información, que debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse rápidamente, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras páginas, entre otros) de modo que crean una comunidad de "amigos" virtual e interactiva.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha reconocido que las redes sociales que se encuentran en internet son un medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma.

En ese sentido, se ha reiterado que la colocación de contenido en una página de internet no tiene una difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación de carácter pasivo, ya que para tener acceso a determinada página a través de la realización de ciertos actos es imprescindible que, previamente, exista la intención clara de acceder a cierta información, ya que, en el uso ordinario (no en el caso de difusión de propaganda pagada), el internet o las redes sociales no permiten accesos espontáneos.

Especialmente en el caso de una red social, en la cual, además, para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red.

También puede acontecer que, tratándose de redes sociales como Twitter, una vez ingresada a la cuenta del usuario éste reciba información de manera directa de otros usuarios, sin que la solicite o ingrese a una cuenta determinada.

No obstante, ello por sí mismo, no hace determinante para el caso concreto, la irregular difusión de mensajes por redes sociales.

Por una parte, porque el criterio contenido en la sentencia SUP-REP-89/2016 que cita el actor, no puede servir de parámetro o sustento jurídico a su pretensión porque en ese precedente el acto impugnado fue una sentencia de la Sala Especializada que individualizó una sanción dentro de un procedimiento especial sancionador, mas no se ventiló la pretensión de invalidez de una elección.

Incluso, lo determinado en dicho precedente consistió en que no existieron elementos objetivos para asegurar que la difusión de los mensajes infractores tuvo repercusiones directas en el resultado de las elecciones que transcurrían en ese entonces; pues se razonó lo siguiente:

“...

Se arriba a dicha conclusión, pues si bien la conducta infractora puso en riesgo los citados principios constitucionales, ello no necesariamente implicó por sí mismo la generación de un daño automático, real y verificable a los mismos, dado que, como se razonó en las multicitadas ejecutorias, objetivamente no se puede saber el número de personas que recibieron los mensajes señalados o las posibles repercusiones en la voluntad de los electores que tuvieron conocimiento de los mismos.

*Esto es, contrariamente a lo alegado por el recurrente, en los asuntos que originaron la resolución que se combate, **no existieron elementos objetivos para asegurar que la difusión de los mensajes infractores tuvo repercusiones directas en el resultado de las elecciones que transcurrían.** Ello, dado que si bien existió la posibilidad de que los tweets denunciados pudieran influir en las preferencias del electorado (de ahí el riesgo sancionado), lo cierto es que tales mensajes también pudieron ser ignorados por quienes tuvieron conocimiento del mensaje, o bien, incluso pudieron constituir un factor negativo o perjudicial para dicho partido político de cara a la elección, ante las críticas adversas que dicha estrategia propagandística generó en prensa y en las propias redes sociales.*

*Por ende, **no es dable afirmar categóricamente que la infracción decretada por esta Sala Superior y sancionada por la autoridad responsable causó efectivamente un daño en el resultado de los comicios,** o bien, que con la sola difusión de los mensajes denunciados el Partido Verde Ecologista de México obtuvo una ventaja (representada en un mayor número de votos) frente al resto de las opciones políticas.*

que contendían.

...

(Lo resaltado es propio de esta sentencia)

Asimismo, no podría ser determinante debido a que el Partido Verde Ecologista de México obtuvo menos votos que los partidos políticos que se posicionaron en los seis primeros lugares, de la elección correspondiente al distrito electoral local 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, esto, si se observan los datos contenidos en el *Acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones de mayoría relativa* respectiva, en el apartado de "**Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos/as independientes**", cuyos datos son:

PARTIDO, COALICIÓN O CANDIDATO/A	(Con letra)	(Con número)
	DOS MIL TRECIENTOS DOCE	2312
	SIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS	7123
	QUINIENTOS OCHENTA	580
	TRES MIL NOVENTA Y SIETE	3097
	CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS	4426
	CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO	5641
	DIEZ MIL CUATROCIENTOS	10400
	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO	4204
	MIL TRECIENTOS OCHO	1308
	TRESCIENTOS	300
	MIL CIENTO SESENTA	1160
	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS	3423
CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS/AS	CUARENTA Y SEIS	46
VOTOS NULOS	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS	1166
TOTAL	CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS	45186

Lo anterior permite advertir que los votos que captó el partido político Verde

Ecologista de México no fueron determinantes para el resultado de esta elección.

Además, el partido actor solo se limita a señalar de manera genérica que se benefició al Partido Verde Ecologista de México a partir de mensajes que pudieron difundirse de manera exponencial; empero, no detalla ni argumenta cómo ese hecho fue determinante para la elección. Ni ello puede derivarse de las cifras de los resultados antes referidos.

En ese sentido, del análisis del escrito de demanda se advierte que el promovente realizó manifestaciones, en una parte genéricas, en otras insuficientes, con relación a su carga argumentativa y probatoria respecto de la forma en que dichas conductas irregulares pudieron impactar de manera determinante en el distrito cuya elección impugna; de ahí que no puede asistirle la razón al partido actor a este respecto.

En consecuencia, en atención a los principios de presunción de constitucionalidad, así como al de conservación de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, al no acreditarse el elemento de la determinancia, es que debe desestimarse el motivo de inconformidad en estudio.¹³

Análisis del agravio relativo a la nulidad de la elección, derivado de la pretendida procedencia de nulidad de la votación recibida en diversas casillas.

A juicio de este Tribunal, lo discutido en el agravio identificado con el inciso e), relativo a que, al resultar procedente la nulidad de casillas en un número suficiente para ello, es, a juicio de la parte impugnante, procedente decretar la nulidad de la elección, deviene inatendible por **inoperante**, pues se hace descansar en los agravios que anteriormente ya fueron desestimados en esta resolución.

Resulta orientadora al respecto, la jurisprudencia de orden de común de rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS**

¹³ Véase la Jurisprudencia 9/98 de rubro: **PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.** Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia Volumen 1, páginas 532-534.

QUE FUERON DESESTIMADOS”.¹⁴

OCTAVO. Efectos de la sentencia. Al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados por el partido político impugnante, se confirma en todos sus términos el Cómputo Distrital, la declaración de validez y la otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la fórmula postulada por la candidatura común “Juntos Haremos Historia por Sonora”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, para la Elección de Diputado Local por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, llevado a cabo en sesión de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 343 y 347 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se resuelve el presente bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Por razones expuestas en el considerando SÉPTIMO del presente fallo, se declaran por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios hechos valer por el partido Fuerza por México, mediante el cual impugna el Cómputo Distrital y la Declaración de Validez de la Elección de Diputado Local por el principio de mayoría relativa, por Distrito 17, con cabecera en Cajeme, Sonora, así como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría a favor de la fórmula postulada por la candidatura común “Juntos Haremos Historia en Sonora”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Sonora, en sesión de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, en consecuencia:

SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el considerando OCTAVO de esta sentencia, se confirman en sus términos los actos impugnados.

NOTIFÍQUESE personalmente a las partes en los domicilios y/o medios señalados en autos, con copia certificada que se anexe de la presente resolución, mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal, así como de manera virtual en la página oficial www.teesonora.org.mx, en el apartado denominado “estrados electrónicos”, en virtud de lo estipulado en el Acuerdo General emitido por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en fecha dieciséis de abril de dos mil veinte.

¹⁴ Época: Novena Época. Registro: 178784. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: XVII.1o.C.T. J/4. Página: 1154.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, en sesión pública de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Leopoldo González Allard, Carmen Patricia Salazar Campillo y Vladimir Gómez Anduro, bajo la ponencia del primero en mención, ante el Secretario General, Licenciado Héctor Sigifredo II Cruz Iñiguez, que autoriza y da fe.- Conste.-



LEOPOLDO GONZÁLEZ ALLARD
MAGISTRADO PRESIDENTE



VLADIMIR GÓMEZ ANDURO
MAGISTRADO



CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO
MAGISTRADA



HÉCTOR SIGIFREDO II CRUZ ÍNIGUEZ
SECRETARIO GENERAL